

Análisis comparado de los planes de gobierno 2026-2030 de los candidatos presidenciales en Colombia 2026 en el marco del modelo de ciudades y territorios inteligentes

Daniel González, Director Centro de Pensamiento en Ciudades y Territorios Inteligentes en la Construcción de Paz, Instituto Tecnológico Metropolitano -ITM-

Porfirio Cardona Restrepo, investigador Centro de Pensamiento en Ciudades y Territorios Inteligentes en la Construcción de Paz, y profesor Universidad Pontificia Bolivariana

Favian Estevan Villamizar Ruiz, Universidad Nacional de Colombia



Institución
Universitaria
Reacreditada en Alta Calidad



**CENTRO DE
PENSAMIENTO**
Ciudades y territorios inteligentes
para la construcción de paz

Introducción

El presente análisis comparativo, elaborado por el Centro de Pensamiento de Ciudades Inteligentes en la Construcción de Paz del ITM examina los Planes de Gobierno 2026-2030 de los candidatos presidenciales en Colombia, en un contexto donde la innovación y la sostenibilidad se convierten en pilares fundamentales para el desarrollo del país. En un momento crucial para la nación, donde la necesidad de transformar las dinámicas urbanas y territoriales se hace evidente, este estudio se enfoca en cómo las propuestas de Paloma Valencia, Sergio Fajardo, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se alinean con los principios de Ciudades y Territorios Inteligentes.

La investigación va más allá de una simple evaluación política, utiliza estándares rigurosos como el Modelo de Medición de Madurez del MinTIC, el índice IESE Cities in Motion (2025) y el IMD Smart City Index (2026), a través de cinco ejes estratégicos. Se busca entender cómo estas pueden transformar la administración pública y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Este enfoque permite una narrativa comparativa continua, que expone la riqueza y diversidad de visiones que cada candidato ofrece para enfrentar los desafíos actuales.

En un país que anhela un futuro más inclusivo y sostenible, este análisis se convierte en una herramienta esencial para la reflexión y el debate en torno a la gobernanza y el desarrollo territorial.

Metodología

La metodología se nutre de la triangulación de tres referentes principales en la que se combina la visión local colombiana con los más altos estándares globales:

1. **Modelo MinTIC (Colombia):** El Modelo de Medición de Madurez de Ciudades y Territorios Inteligentes (MMMCTIC) sitúa a las personas en el centro del ecosistema.

Se estructura en 6 dimensiones (Personas, Gobernanza, Calidad de Vida, Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Hábitat) y 5 ejes habilitadores transversales (Institucionalidad e innovación, Infraestructura digital e interoperabilidad, Liderazgo y capital humano, Tecnología y estándares, y Analítica y gestión de datos). Su premisa es que la tecnología sirve únicamente como herramienta de transformación social, económica y ambiental, no como un fin en sí mismo.

2. **IESE Cities in Motion (ICIM 2025):**

Evalúa el desarrollo sostenible y la competitividad a través de 9 dimensiones clave: Capital humano, Cohesión social, Economía, Gobernanza, Medioambiente, Movilidad y transporte, Planificación urbana, Proyección internacional y Tecnología. Fomenta un modelo basado en ecosistemas sostenibles, innovación, equidad ciudadana y territorios conectados.

3. **IMD Smart City Index (2026):** Clasifica a las ciudades basándose en la percepción de sus residentes a través de dos pilares fundamentales: “Estructuras” (infraestructura física e institucional) y “Tecnologías” (servicios digitales). Estas se miden en cinco áreas: Salud y seguridad, Movilidad, Actividades, Oportunidades y Gobernanza. El modelo advierte que la tecnología por sí sola no produce mejores resultados si no está arraigada en instituciones creíbles y alineada con las expectativas ciudadanas (confianza).

Para analizar los planes de manera estandarizada, las dimensiones de los tres modelos se agruparon en 5 ejes unificados. Cada propuesta de los candidatos se clasificó y analizó bajo estas categorías:

1. **Gobernanza, institucionalidad y confianza:** integra las dimensiones de Gobernanza (MinTIC e IESE) y el pilar de Estructuras del IMD. Evalúa la transparencia, la lucha anticorrupción, la eficiencia del Estado y la participación ciudadana.
2. **Personas, cohesión social y calidad de vida:** une Personas y Calidad de Vida

(MinTIC), Capital humano y Cohesión social (IESE), y las áreas de salud/seguridad del IMD. Mide educación, salud, seguridad, inclusión y equidad.

3. **Desarrollo económico y oportunidades:** agrupa Desarrollo Económico (MinTIC), Economía (IESE) y el área de Oportunidades (IMD). Analiza empleo, emprendimiento, competitividad y economía del conocimiento.
4. **Hábitat, medio ambiente y movilidad:** consolida Hábitat y Medio Ambiente (MinTIC), junto a Medioambiente, Movilidad y Planificación urbana (IESE), y el área de Movilidad del IMD. Revisa infraestructura, sostenibilidad, servicios públicos y ordenamiento territorial.
5. **Tecnología, Interoperabilidad y Datos (Eje Transversal):** Integra los 5 ejes habilitadores del MinTIC, Tecnología (IESE) y el pilar de Tecnologías (IMD). Evalúa el uso de infraestructura digital, analítica de datos e IA como herramientas de apoyo.

Análisis por eje

Eje 1: Gobernanza, institucionalidad y confianza

La gobernanza en un territorio inteligente exige superar la fragmentación histórica del Estado, construyendo instituciones sólidas y transparentes que logren recuperar la confianza perdida de la ciudadanía mediante la articulación institucional, la participación ciudadana y una lucha frontal contra la corrupción. En este eje, los candidatos despliegan arquitecturas estatales diversas que oscilan entre la máxima eficiencia tecnocrática, el rigor fiscal y la profundización del poder popular.

Por un lado, existe una clara apuesta por modernizar la maquinaria interna del Estado mediante herramientas digitales y de gestión de punta. El plan de Paloma Valencia se destaca por la propuesta de migrar hacia un “Estado Plataforma”,

un modelo que busca la interoperabilidad total de los datos públicos y que establece, como medida estrella, la adopción de la tecnología *Blockchain* para volver inalterable cada etapa de la contratación pública, a lo que denominan “Contratación en vitrina”. Sumado a esto, proponen el uso de Inteligencia Artificial para identificar riesgos en los contratos y emitir alertas tempranas, la creación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) 24/7 en la Presidencia y la aplicación de una justicia restaurativa local donde “lo robado vuelve al barrio” en forma de obras. Todo esto acompañado de una reducción del 25% en los gastos de funcionamiento de la rama ejecutiva y el congelamiento del 30% de las órdenes de prestación de servicios.

En una línea de rigor gerencial e institucional similar, Abelardo de la Espriella aborda la crisis de confianza desde la disciplina fiscal, el patriotismo constitucional y la autoridad. Su propuesta central radica en una contracción dramática del tamaño del Estado hasta en una cuarta parte en la que pretende eliminar la nómina política y fusionando agencias redundantes para garantizar un superávit fiscal primario inmediato. Para combatir la corrupción, propone la creación de un Bloque de Búsqueda contra la corrupción (dirigido directamente por la Presidencia de la República), la limpieza inmediata de las directivas de entidades estratégicas como Ecopetrol y la aplicación de extinción de dominio exprés para desmantelar las finanzas ilícitas. Su visión institucional es vertical y prioriza el orden macroeconómico y el fortalecimiento de un comité autónomo de regla fiscal con “dientes” para controlar los excesos legislativos y ejecutivos.

Por su parte, Sergio Fajardo también apunta a superar los silos institucionales, pero con un enfoque centrado en la transparencia normativa y la despolitización. Propone la creación de una “Jurisdicción Nacional Digital” interoperable y la unificación de las plataformas de gasto público, para garantizar que el presupuesto nacional esté abierto al escrutinio en tiempo real. Su lucha anticorrupción se materializa en la transformación de la Secretaría de Transparencia en una Agencia Anticorrupción independiente, la expedición de

una Ley de *Lobby* estricta para regular las relaciones público-privadas, y la protección legal a los denunciantes. Hace un énfasis particular en reformar el sistema de elección de los órganos de control (Fiscalía, Procuraduría, Contraloría) para que se basen exclusivamente en el mérito, convocatorias públicas y paridad de género, alejando a la justicia de la captura política. Además, propone llevar el Estado al campo mediante jueces itinerantes y justicia comunitaria.

Desde una perspectiva sustancialmente distinta, el plan de Iván Cepeda fundamenta la recuperación de la confianza institucional no solo en la eficiencia administrativa, sino en el empoderamiento directo y vinculante de la sociedad civil. Su propuesta arquitectónica es el “Sistema Nacional contra la Macrocorrupción”, el cual se basa en la filosofía zapatista de “mandar obedeciendo”, otorgándole a los movimientos sociales, vecinales y comunitarios un poder fiscalizador directo sobre los recursos del Estado. Propone una estricta “Ley de Austeridad Republicana” que iniciará reduciendo el salario del presidente y sus ministros desde el primer día, con la eliminación de lujos, viáticos excesivos y gastos de representación suntuarios de la alta burocracia. A esto suma la prohibición absoluta de la contratación directa mediante convenios interadministrativos para el uso de regalías, obligando a que toda obra se adjudique por licitación pública o, de manera innovadora, a través de un régimen simplificado que permita a las Juntas de Acción Comunal ser contratistas directos del Estado. Cepeda condiciona la gobernanza a un Gran Acuerdo Nacional y a un poder constituyente activo y permanente.

Eje 2: Personas, cohesión social y calidad de vida

El desarrollo de un territorio inteligente no se mide exclusivamente por la cantidad de concreto (infraestructura crítica) o tecnología que despliega, sino por su capacidad para generar capital humano, erradicar la pobreza, cerrar brechas espaciales y construir cohesión social. En este ámbito, los planes de gobierno analizados revelan una inten-

ción de transformar la política social que abandone el asistencialismo fragmentado para dar paso a sistemas basados en la precisión de los datos y el desarrollo preventivo.

Una de las coincidencias metodológicas más notables y prometedoras entre los candidatos es la urgencia de eliminar a los intermediarios políticos en la entrega de las ayudas del Estado mediante la interoperabilidad. Paloma Valencia propone la creación de una “Cédula del Hogar” conectada a un Registro Universal de Ingresos (RUI), lo que permitiría focalizar y dispersar subsidios directamente a través de billeteras digitales, que priorice a las mujeres cabeza de hogar. De manera equivalente, Sergio Fajardo estructura toda su política social sobre un RUI que fusiona las gigantescas bases de datos del DANE, la DIAN, el Sisbén y la PILA para garantizar un Ingreso Mínimo Garantizado a los hogares en pobreza extrema. Abelardo de la Espriella refuerza esta visión planteando un cruce interinstitucional entre el Sisbén IV y la DIAN para frenar el fraude en la asignación de recursos y acabar con la regresividad. Por su parte, Iván Cepeda busca la misma “cero intermediación” burocrática promoviendo una renta básica universal como un derecho inalienable y garantizando que las comunidades históricamente excluidas tengan el control directo de su desarrollo.

Más allá de los subsidios y los cruces de datos, las visiones de calidad de vida se despliegan en proyectos de gran impacto social. Sergio Fajardo propone la instauración de un robusto Sistema Nacional de Cuidado para liberar a las mujeres de la carga histórica del trabajo no remunerado, adicional a un modelo de salud basado en la atención primaria y la medicina comunitaria para cerrar brechas territoriales con la modernización del sector mediante la Historia Clínica Interoperable. En educación, Fajardo plantea conectar la formación media con el mundo laboral a través de enfoques STEAM y un proyecto nacional de matemáticas.

Paloma Valencia aborda la calidad de vida con la Ruta 3E (Estudiar, Emplearse o Emprender), la creación de 150.000 bonos educativos que otorgan

libertad de elección entre colegios públicos y privados, y la formación de 1 millón de jóvenes en inteligencia artificial. En salud, propone “Hospitales padrinos” para llevar especialistas al campo vía telemedicina, un plan de choque para resolver 10 millones de atenciones represadas en los primeros 100 días, y un innovador capital semilla de ahorro pensional de \$500.000 para cada niño que nazca en situación de pobreza.

Abelardo de la Espriella lanza como prioridad absoluta el “Plan Cosecha Solidaria” enfocado en erradicar el hambre extrema. Su propuesta en salud exige un plan de choque de 10 billones de pesos para destrabar la crisis financiera de las EPS y los hospitales, poniendo al paciente en el centro. Además, promueve la autonomía económica femenina con la formalización de 200.000 emprendimientos liderados por mujeres y establece rutas judiciales aceleradas de máximo 72 horas para proteger a las mujeres víctimas de violencia.

Iván Cepeda eleva la calidad de vida al cumplimiento integral del Acuerdo de Paz de 2016 y la superación del racismo y patriarcado histórico. Exige el reconocimiento de las víctimas, el respeto al salario vital (manteniendo los fuertes aumentos del salario mínimo) y el fortalecimiento expansivo de la educación pública universitaria a través de multicampus en regiones marginadas. Centra su visión de cohesión en que las poblaciones campesinas, afrodescendientes e indígenas no sean vistas como receptores de limosnas, sino como sujetos de derechos fundamentales y cogobernantes del país.

Eje 3: Desarrollo económico y oportunidades

Una ciudad o territorio inteligente requiere de un entorno macroeconómico dinámico, que facilite el emprendimiento, fomente la competitividad internacional y transite hacia una economía de innovación y resiliencia productiva, que permita cerrar las inmensas brechas de desigualdad.

En la búsqueda de destrabar el crecimiento corporativo y facilitar la vida del ciudadano, varios candidatos presentan propuestas de choque contra la tramitología. Abelardo de la Espriella lidera una visión de desregulación masiva. Propone la “Gran Revolución de DesRegulación”, dictando que por cada norma nueva que el Estado emita, se deban eliminar dos. A esto suma una elevada reducción de tarifas del impuesto de renta corporativo y la eliminación total del impuesto al patrimonio para atraer inversión extranjera y lograr el crecimiento como las tasas asiáticas del 7% del PIB. Complementa su visión económica democratizando el acceso al capital mediante el programa “País de propietarios”, que masificará el acceso a la vivienda con tasas de interés muy bajas del 2% a 30 años, e impulsando la “economía plateada” para que los adultos mayores rentabilicen sus activos.

Paloma Valencia aborda la asfixia empresarial a través de su “Escalera de la formalidad” para garantizar la gratuidad en los trámites del Invima y las Cámaras de Comercio, sumado a un mini régimen simple de tributación. Para fomentar la inclusión productiva, propone un subsidio al primer empleo juvenil, asumiendo el Estado entre el 30% y el 40% del salario mínimo por 12 a 18 meses para empresas que contraten a jóvenes en la que se prioricen mujeres y zonas PDET. Valencia innova financieramente al proponer el uso masivo de billeteras digitales respaldadas por el Estado para otorgar historia crediticia a los trabajadores informales y vendedores ambulantes, rescatándolos de las redes criminales del crédito “gota a gota”.

En este sentido, Sergio Fajardo centra su apuesta económica en consolidar la “economía del conocimiento” exigida por los modelos globales. Su plan es enfático en articular orgánicamente la Cuádruple Hélice, conectando a las universidades, los institutos técnicos y las *startups* mediante un nuevo modelo de gobernanza del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Propone crear 10 aceleradoras regionales de crecimiento y un Hub Govtech/Agrotech regional. Simultáneamente, Fajardo protege a la economía de base con

una ruta de estabilidad para 1 millón de micronegocios con metas estrictas de equidad: el 50% de las empresas apoyadas por el Estado deberán ser lideradas por mujeres y el 30% por jóvenes.

Iván Cepeda plantea una disrupción del modelo económico tradicional mediante una “Revolución Agraria” que redistribuya activos subutilizados y democratice el acceso a la tierra fértil. Su objetivo no es solo entregar más de un millón de hectáreas al campesinado, sino dotar esas tierras de vías, crédito y tecnología para convertir a Colombia en una potencia agroalimentaria mundial. Cepeda impulsa una transición hacia la bioeconomía, el rescate de cadenas productivas históricas (algodón, yuca, cacao, café) arruinadas por la apertura económica, y la conversión de las economías populares, informales y comunitarias en los principales motores de prosperidad. Pretende garantizar siempre la defensa férrea de los derechos de los trabajadores y el incremento del salario real por encima de los índices de mercado.

Eje 4: Hábitat, medio ambiente y movilidad

El ordenamiento territorial, la resiliencia climática y la infraestructura logística conforman uno de los ejes más críticos del debate sobre la sostenibilidad y conectividad del país. Los modelos de ciudades inteligentes exigen que la modernización urbana y rural no comprometa el futuro de los ecosistemas ni vulnere la gobernanza comunitaria.

Frente a la conectividad física, hay un consenso generalizado sobre la necesidad de interconectar el país, pero con métodos divergentes. Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella ponen un fuerte acento en acelerar y terminar definitivamente las grandes concesiones viales de cuarta y quinta generación (4G y 5G), confiando ampliamente en el modelo de Asociaciones Público-Privadas (APP). Valencia aporta además una visión pragmática para la ruralidad profunda. Propone soluciones de conectividad híbrida que combinan internet satelital y paneles solares comunitarios para aquellas zonas aisladas que sufren de servicios eléctricos deficientes. Promueve un turismo

que alcance los 12 millones de visitantes (Plan Turismo 12M) y la restauración de 1 millón de hectáreas, ligando su política ambiental al control del territorio y la seguridad.

Sergio Fajardo y Iván Cepeda coinciden en la urgencia de estructurar un sistema de transporte verdaderamente intermodal, que reviva la red ferroviaria nacional y potencie las vías fluviales, conectando a los territorios históricamente aislados de la periferia con las grandes ciudades y puertos, con una planificación logística de largo plazo. Fajardo propone además un “Pacto Energético” nacional consensuado con empresas, gremios y sociedad civil, la expansión acelerada de 1.000 MW anuales de energías renovables, y un urbanismo social enfocado en cofinanciar el mejoramiento de los barrios marginados. Pretende garantizar agua potable para un millón de personas adicionales.

Es en el componente de uso del suelo, extractivismo y licenciamiento donde las visiones se bifurcan radicalmente. Iván Cepeda plantea un rechazo categórico e innegociable al *fracking* y a los megaproyectos de extractivismo depredador. Su propuesta otorga a los pueblos ancestrales, indígenas y afrodescendientes el reconocimiento como máxima autoridad ambiental en la protección de la selva y el agua. Aboga por una transición ecológica estricta con justicia social, el cuidado sagrado de los páramos y una política de hábitat que promueva la autoconstrucción comunitaria de vivienda como política de Estado. Prioriza siempre la prevención del riesgo frente a desastres naturales sobre la explotación minero-energética.

En la otra orilla, privilegiando un crecimiento macroeconómico de choque, Abelardo de la Espriella propone consolidar la Atillanura como una inmensa plataforma agroindustrial (el “Matto Grosso” colombiano), dotando a 100.000 jóvenes con formación mediante la Escuela de Emprendedores Rurales. Su enfoque ambiental promueve expresamente la expedición de licenciamientos ambientales *express* y la aceleración de las consultas previas a las comunidades étnicas con el fin explícito de destrabar rápidamente megaproyectos mineros, de energía nuclear y renovables.

Defiende la ganadería regenerativa y la fumigación aérea para erradicar los cultivos ilícitos. Concibe al territorio como una despensa productiva que requiere orden jurídico y seguridad para florecer.

Eje 5: Tecnología, interoperabilidad y datos (transversal)

La tecnología en un territorio inteligente actúa como el sistema nervioso central que articula, audita y potencia todas las demás dimensiones del desarrollo humano y estatal. Las propuestas analizadas demuestran una sofisticación técnica sobresaliente, que posicione la digitalización como el eje rector de la nueva administración pública y el cierre de brechas.

Paloma Valencia lidera una visión hipertecnológica con su modelo de Estado “AI First”. Propone un Plan Nacional de Inteligencia Artificial (PNIA) diseñado para que los cuellos de botella burocráticos, las afiliaciones y los trámites ciudadanos se resuelvan de manera automática. Plantea utilizar tableros predictivos administrados por el DNP para la toma de decisiones en tiempo real, la adopción de *sandboxes* regulatorios para permitir la libre experimentación del sector privado, y la implementación masiva de la métrica del Net Promoter Score (NPS). Esto último obligaría al Estado a condicionar la existencia de sus programas sociales y tecnológicos a la calificación directa de satisfacción que otorgue el ciudadano final. Valencia también promete formar a 1 millón de jóvenes en habilidades de programación e Inteligencia Artificial.

En una línea institucional comparable, Abelardo de la Espriella asume el compromiso de migrar la totalidad de los procesos de contratación pública de la nación hacia un entorno tecnológico de *Blockchain* para el año 2030, en el que certifica una inalterabilidad absoluta de los datos y blindando los recursos del Estado contra la manipulación. Además, promete transformar a la DIAN en un “Estado Predictivo”, con la utilización de sistemas avanzados de Inteligencia Artificial para acorralar la evasión fiscal mediante analítica de datos

masivos. Su enfoque transversal integra la Industria 4.0 al sector agropecuario e impulsa un modelo de educación virtual en casa (STEM) patrocinado por el Estado para conectar a los jóvenes con el sector productivo.

Sergio Fajardo concibe la tecnología como el gran democratizador social y laboral, apostando por el impulso de ecosistemas *Govtech* y *Agrotech* mediante *Hubs* regionales apoyados por el gobierno y la academia. Enfoca gran parte de su arquitectura digital en el sector social, con un ecosistema unificado de historias clínicas y el fortalecimiento masivo del *E-health* y la telemedicina para llevar diagnósticos y especialistas de alta complejidad a las zonas rurales de la Colombia profunda. Al mismo tiempo, plantea la creación de un consulado digital 24/7 para proteger e integrar financieramente a los millones de miembros de la diáspora colombiana en el exterior.

Iván Cepeda, desde su visión de la Revolución Ética, subordina estratégicamente toda la digitalización y el despliegue tecnológico a un propósito de control social y democratización del poder. Propone la implementación de una ventanilla única digital con trazabilidad financiera total, interoperable con el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP), para que la ciudadanía audite cada etapa de los proyectos de inversión y las regalías territoriales en tiempo real. Para Cepeda, la modernización de los procesos del Estado y las plataformas digitales solo tienen sentido si sirven exclusivamente para garantizar que los recursos y los derechos lleguen de forma rápida, justa y sin intermediarios burocráticos a las víctimas, a los campesinos y a las poblaciones más vulnerables del país.

Conclusión

El análisis comparado de los planes de gobierno 2026–2030 evidencia un consenso creciente en el uso de herramientas digitales, interoperabilidad de datos e inteligencia artificial como soportes para la gestión pública. Las diferencias entre

las propuestas no radican en la tecnología en sí misma, sino en los modelos de gobernanza, el rol del Estado y la forma en que la ciudadanía participa en la transformación del territorio.

Las ciudades y territorios inteligentes en Colombia deben superar la incorporación de soluciones tecnológicas *per se* y plantea más bien el desafío relacionado con la formación de ciudadanos inteligentes, entendidos como actores capaces de comprender, apropiarse y utilizar la tecnología para incidir de manera crítica y constructiva en su entorno.

Los programas analizados configuran distintos caminos posibles, que van desde modelos centrados en la eficiencia institucional y la automatización, pasando por esquemas de articulación entre actores del ecosistema de innovación, hasta propuestas que amplían el control social y la participación directa. Cada uno implica formas distintas de relación entre Estado, tecnología y ciudadanía.

Más allá del enfoque adoptado, la implementación efectiva de estos modelos dependerá de condiciones estructurales compartidas, por ejemplo:

1. No es posible un Estado inteligente sin instituciones capaces de gestionar datos, coordinar actores y sostener procesos en el tiempo.
2. La tecnología solo genera valor público cuando existe apropiación social; esto exige ciudadanos con pensamiento crítico, capacidades digitales y participación informada.

3. La diversidad regional del país requiere soluciones adaptativas que reconozcan brechas urbanas y rurales.
4. La adopción de tecnologías en lo público depende de la credibilidad institucional y la transparencia en el uso de los datos.

El tránsito hacia territorios inteligentes implica gestionar tensiones estructurales que no pueden resolverse únicamente desde la tecnología. Así, entonces, la automatización de decisiones debe equilibrarse con espacios reales de deliberación ciudadana; la sofisticación tecnológica requiere de entornos institucionales y sociales preparados para su implementación y la estandarización de soluciones debe dialogar con las dinámicas locales y el conocimiento del territorio.

Las implicaciones para la construcción de ciudadanos inteligentes precisan de cambios de paradigma en la política pública, que permitan desplazar el énfasis desde la infraestructura tecnológica hacia el desarrollo de capacidades humanas; la ciudadanía no es un actor pasivo, sino como co-creadora de soluciones públicas y se exige integrar educación, cultura digital y participación en las estrategias de desarrollo territorial. La inversión en tecnología debe estar acompañada de procesos sostenidos de formación, apropiación y fortalecimiento del tejido social.

No se trata únicamente de digitalizar el Estado, la construcción de territorios inteligentes es, ante todo, un proceso educativo y social con sentido territorial, equidad y sostenibilidad.